



RESOLUCIÓN No. CSJBOR19-687

18 de noviembre de 2019

“Por medio de la cual se abstiene de dar trámite a una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia Judicial Administrativa No.: 13001-11-01-001-2019-00313

Solicitante: Luis Fernando Romero Medrano

Despacho: Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena

Funcionario Judicial: Lina María Hoyos Hormechea

Proceso: Ordinario Laboral

Número de radicación del proceso: 13001-31-05-007-2012-00503-00

Magistrado Ponente: Patricia Rocío Ceballos Rodríguez

Fecha de sesión¹: 13 de noviembre de 2019

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

El doctor Luis Fernando Romero Medrano, obrando en su calidad de apoderado de la parte demandante en el proceso ordinario laboral identificado con el número de radicación 13001-31-05-007-2012-00503-00 que cursa en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, solicitó se inicie el trámite de la vigilancia judicial administrativa respecto del mismo por considerar que *“el juzgado de marras ha incumplido flagrantemente su deber constitucional y legal de impartir una justicia oportuna, pues ha sido abierta y ostensiblemente negligente en el cumplimiento de su misión institucional; por cuanto se han suscitado, en el desarrollo de este proceso dilataciones injustificadas y perjudiciales...y porque además no ha hecho valer su poder discrecional y su autoridad”*

Sustentó lo anterior al indicar que el proceso de referencia se inició en el año 2012 *“para concluir luego de dos instancias y de corrección de la sentencia del ad quem, en abril de 2015, casi tres años después (retraso)”*

Que el 31 de marzo de 2017 se libró mandamiento de pago y consecuentemente se ordenó el embargo y secuestro de los dineros que posee la demandada en sendas entidades bancarias, a lo que el Banco Davivienda respondió con negativas, por alegar la inembargabilidad de esos recursos, pero *“el juzgado no adoptó determinación alguna en contra de la negativa”*

Asimismo, indicó que el juzgado tuvo ausencia de interés para procurar la solución del litigio, pues libró oficio a la entidad bancaria para que certificara aspectos relativos a las cuentas que tiene la demandada en esa corporación, y que a pesar de que la entidad no contestó, el Juzgado profirió auto a través del cual *“resuelve asuntos de menor importancia”*.

Que luego de ello y habida cuenta de la *“insistencia e inconformidades de nuestra parte, el juzgado aludido...procede a librar un solitario y huérfano oficio de embargo dirigido a la entidad bancaria BBVA”*, a lo que esta última respondió que no era posible dada la

¹ Sesión celebrada por los 2 magistrados, que integran el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar. Acuerdo PSAA16-10583.

inembargabilidad de los recursos. Que tal determinación la considera *“pecaminosa, contradictoria, inconsecuente e ilegal puesto que esta entidad financiera en otras ocasiones y ante tal orden judicial de embargo, **SI** ha procedido a acatarlas...pero, al respecto “el juzgado endilgado aún no ha asumido una posición respecto a esta injusta decisión y una eficaz actuación para amparar los derecho de la accionante”*

En razón de tales sucesos solicitó se inicie el trámite de la vigilancia judicial administrativa respecto del *sub lite*.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el doctor Luis Fernando Romero Medrano, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2. Problema administrativo

Conforme a los hechos en que se funda la solicitud, corresponde a esta corporación determinar si hay lugar a iniciar el trámite de la vigilancia judicial administrativa, y en consecuencia proceder a la verificación de lo alegado, en consonancia con lo señalado en el artículo 5° del Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011.

Para resolver la cuestión planteada, se deberá abordar el tema relacionado a continuación.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma cómo un funcionario interpreta una norma o valora las

pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la sala jurisdiccional disciplinaria seccional.

4. Caso concreto

El doctor Luis Fernando Romero Medrano, obrando en su calidad de apoderado de la parte demandante en el proceso ordinario laboral identificado con el número de radicación 13001-31-05-007-2012-00503-00 que cursa en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, solicitó se inicie el trámite de la vigilancia judicial administrativa respecto del mismo por considerar que *“el juzgado de marras ha incumplido flagrantemente su deber constitucional y legal de impartir una justicia oportuna, pues ha sido abierta y ostensiblemente negligente en el cumplimiento de su misión institucional; por cuanto se han suscitado, en el desarrollo de este proceso dilataciones injustificadas y perjudiciales...y porque además no ha hecho valer su poder discrecional y su autoridad”*

Sustentó lo anterior al indicar que el proceso de referencia se inició en el año 2012 *“para concluir luego de dos instancias y de corrección de la sentencia del ad quem, en abril de 2015, casi tres años después (retraso)”*

Que el 31 de marzo de 2017 se libró mandamiento de pago y consecuentemente se ordenó el embargo y secuestro de los dineros que posee la demandada en sendas entidades bancarias, a lo que el Banco Davivienda respondió con negativas, por alegar la inembargabilidad de esos recursos, pero ***“el juzgado no adoptó determinación alguna en contra de la negativa”***

Asimismo, indicó que el juzgado tuvo ausencia de interés para procurar la solución del litigio, pues libró oficio a la entidad bancaria para que certificara aspectos relativos a las cuentas que tiene la demandada en esa corporación, y que a pesar de que la entidad no contestó, el Juzgado profirió auto a través del cual *“resuelve asuntos de menor importancia”*.

Que luego de ello y habida cuenta de la *“insistencia e inconformidades de nuestra parte, el juzgado aludido...procede a librar un solitario y huérfano oficio de embargo dirigido a la entidad bancaria BBVA”*, a lo que esta última respondió que no era posible dada la inembargabilidad de los recursos. Que tal determinación la considera *“pecaminosa, contradictoria, inconsecuente e ilegal puesto que esta entidad financiera en otras ocasiones y ante tal orden judicial de embargo, **SI** ha procedido a acatarlas...pero, al respecto “el juzgado endilgado aún no ha asumido una posición respecto a esta injusta decisión y una eficaz actuación para amparar los derecho de la accionante”*

Analizados los argumentos expuestos en la solicitud de vigilancia judicial administrativa, se advierte que lo pretendido por el peticionario no es normalizar una situación de deficiencia de la administración de justicia con ocasión a una mora judicial actual, pues lo que realmente persigue es que esta seccional revise las actuaciones surtidas dentro de la proceso de referencia, en el sentido de cuestionar las decisiones adoptadas por la funcionaria judicial en el *sub lite*, atribuciones que escapan de la órbita de competencia,

de conformidad con las facultades descritas en los artículos 101 de la Ley 270 de 1996 y 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, a partir de los cuales se concluye que este trámite administrativo está encaminado únicamente a ejercer un control de términos sobre las actuaciones judiciales.

Además, el artículo 14 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 señala que *“en desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*.

En ese orden, no es posible cuestionar, por esta vía, el contenido de las actuaciones judiciales, los fundamentos normativos que se consideran en las providencias, inmiscuirse en los asuntos de puro derecho que se debatan o en la valoración de pruebas; de hacerlo, se pondrían en entredicho la autonomía e independencia de los jueces, garantía que también se encuentra contemplada en los artículos 228² y 230³ de la Constitución Política y 5° de la Ley 270 de 1996. Así mismo, debe precisarse que esta corporación no tiene competencia para emitir conceptos jurídicos dentro de los asuntos que son puestos bajo conocimiento.

Sobre el particular, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC10-53 del 10 de diciembre de 2010, dispuso que *“al analizarse la competencia atribuida en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996 a los Consejos Seccionales, **es claro que apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar este mecanismo para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, o para influir en el sentido de sus decisiones.** No podrán por tanto los Consejos Seccionales – Salas Administrativas - indicar o sugerir el sentido de las decisiones judiciales, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la ley y en fin nada que restrinja su independencia en ejercicio de la función judicial”*. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Así mismo, en sentencia SU-041 del 16 de mayo de 2018⁴, la Corte Constitucional reiteró la postura que ha mantenido la jurisprudencia en relación con el principio de autonomía judicial, al señalar:

“En ese sentido, la jurisprudencia constitucional reconoce que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y están sometidos únicamente al imperio de la ley, y más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, mediante sus providencias desarrollan un complejo proceso de integración e interpretación del derecho, en especial, dirigido a proteger los derechos sustantivos y procesales de las partes”.

De conformidad con lo expuesto, en observancia a los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial, es el operador judicial quien debe valorar y decidir sobre la situación jurídica de cada proceso, sin que en ello pueda tener injerencia esta corporación.

² “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. (...)”

³ “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. (...)”

⁴ Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Aunado a lo anterior, es pertinente advertir que de existir inconformidad con el contenido de las actuaciones judiciales, las partes pueden hacer uso de los medios de impugnación que sean procedentes o ejecutar otras herramientas judiciales que realmente estén direccionados a la controversia de asuntos jurisdiccionales, así como, adelantar las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos que puedan considerar como contrarios a derecho, ante las autoridades correspondientes.

De otro lado, en relación con lo manifestado por el peticionario a lo largo de su solicitud respecto de las dilaciones que se presentaron en el *sub examine*, esta seccional advierte que no es posible requerir el informe de verificación y consecuentemente, iniciar el trámite de la vigilancia judicial administrativa, por cuanto de los artículos 1° y 6° del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, “por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996”, se infiere razonablemente que la finalidad de esta actuación administrativa es procurar por la eficiente prestación del servicio de administración de justicia para sucesos de mora presentes, mas no de eventuales sucesos de mora pasada, como en el particular.

5. Conclusión

En consecuencia, dado que el motivo de la solicitud de vigilancia judicial administrativa no es la existencia de factores contrarios a la administración oportuna y eficaz de la justicia, entendidos como demoras injustificadas actuales, esta seccional se abstendrá de iniciar el susodicho procedimiento administrativo, y en consecuencia dispondrá su archivo.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

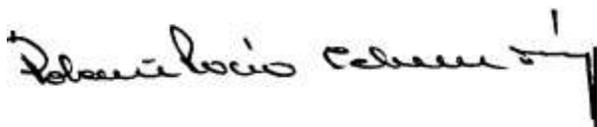
3. RESUELVE

PRIMERO: Abstenerse de dar trámite, y en consecuencia, archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el doctor Luis Fernando Romero Medrano, obrando en su calidad de apoderado de la parte demandante en el proceso laboral identificado con el número de radicación 13001-31-05-007-2012-00503-00 que cursa en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente resolución al doctor Luis Fernando Romero Medrano (peticionario), y a la doctora Lina Hoyos Hormechea, Juez Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena.

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

PRCR/MFRT